

y protege al C. Fermin Erabien, contra la providencia dictada por el Fiscal de causas militares, por la que ha ordenado su permanencia indefinida en Mérida que no es el lugar de su domicilio.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*José María Lozano.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velásquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México,.... de Febrero de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

AUTOS

Promovidos por el C. Lic. Joaquín del Moral en representación del C. Juan Díaz Ceballos, oponiéndose á la denuncia que el Lic. Manuel García Arellano hizo ante la Jefatura de Hacienda del Estado de Puebla, de un capital impuesto en favor de una obra pía, en la hacienda de San Lorenzo y Casa Amarilla, situada en el Distrito de Tehuacan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Previniendo generalmente el interés del fisco en los juicios que á su nombre se siguen de leyes claras y precisas, la resolución de aquellos es de las mas fáciles, puesto que

solo importa una decision judicial de un punto de derecho.

Y ya que hay algunos hechos materiales cuya existencia sea preciso hacer constar previamente á la aplicacion de la ley, la prueba ni necesita de largos terminos, ni puede ser de dudoso resultado, atendida la clara disposicion de la ley, que designa la circunstancia, el caso ó el modo en que debe ser aplicada. Si á esto se añade la estricta equidad y la exacta observancia de las leyes, se comprende facilmente que en los juicios en que la hacienda pública tiene interés, no son precisas las diligencias, ni las formalidades, ni la escrupulosa nimiedad de un juicio ordinario. En esto puede sospechase fundadamente de la buena fé y justicia en que litiga alguna de las partes, sin contar con los innumerables casos en que puede y con razon, dudarse del derecho de ambas: los hechos, las obligaciones y los derechos recíprocos, se enlazan y coordinan de tal modo, que apenas los trámites y dilaciones judiciales pueden bastar á evitar la confusion; y el interés del negocio es cosa que afecta exclusivamente á los litigantes.

Se ve pues que no existe en los juicios fiscales ninguna de las razones de conveniencia, necesidad y justicia porque se han establecido los juicios ordinarios; y si á esto se agrega el positivo y legítimo interés que el legislador, sea cual fuere, tiene en facilitar la accion fiscal en unos casos, ó en hacerla pronta y efectivamente realizable en otros, se explica porque debe ser sumario todo juicio en que se versa interés del Erario público.

Bien sé que no se necesita entrar en el exámen de las leyes para pedir su observancia; pero cuando estas están conforme con la justicia y la razon, bien puede hablarse á nombre de esta, para dar mas fuerza, si es posible, al deber de explicar aquellas.

La suprema resolución de 28 de Marzo de 1872, previno: que en juicio sumario se decidan los asuntos relativos á nacionalizacion: lo mismo dispone la de 4 de Abril de

1871, refiriéndose al artículo 23 de 5 de Febrero del mismo año, y aun hubo alguna que determinó que fueran verbales los juicios que se instauraran sobre preferencia de denuncios.

El caso presente versa sobre la legalidad de una denuncia. Si el C. Moral figura como parte en el pleito, no es seguramente sino como opositor á la accion fiscal, pues de otra manera no podría explicarse su intervencion. La circunstancia de que el C. Arellano sostenga la legalidad y validéz de la denuncia, no cambia en nada las cosas, pues identifica su derecho con el del fisco, y nada mas puede pedir que se ceda de lo que á este le concede la ley. La cuestion que nos ocupa, por lo mismo, versa entre el fisco y un particular, y debe decidirse en juicio sumario, con arreglo á las leyes citadas, y de conformidad con la práctica establecida en toda la República. En esa virtud, el suscrito Promotor, seguro de la justificacion del Juzgado, espera que fallará en ese sentido el artículo pendiente. Zaragoza, Julio 22 de 1871.—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla de Zaragoza, Julio 27 de 1872.—Vista la solicitud del Lic. D. Manuel G. Arellano de 10 de Mayo de 1871, sobre que se declare ser sumario el presente juicio; la oposicion del Lic. D. José Joaquin del Moral, hecha en su escrito de 24 de Mayo del mismo año; la comparecencia del expresado Arellano, fecha 17 de Junio, con el pedimento fiscal de 22 de Julio, apoyando la pretension del actor, y los apuntamientos exhibidos por el demandado en 22 de Julio último, al citársele para esta resolucion.

Considerando; primero: que versando el presente juicio sobre la validéz ó renuncia de un capital que se dice ser de los nacionalizados, cualquiera que sea la resolucion que en definitiva se dicte, ella debe afectar á los intereses del fisco, y por lo mismo es-

te debe considerarse parte en el juicio, como de hecho se ha considerado, puesto que se ha oído al C. Promotor fiscal sin que á ello se opusiera el Sr. del Moral.

Segundo: que no opta para considerar al fisco como interesado en el negocio, la circunstancia de que no haya sido el representante fiscal quien lo promovió, sino el denunciante Arellano, porque ademas de que ya aquel interviene en el juicio, los intereses de uno y otro están identificados, pues que el fisco percibiera ó no el importe de la redencion del capital denunciado, segun que se declare buena ó mala la denuncia.

Tercero: que supuesto el interés del fisco en el juicio, el procedimiento debe ser el determinado por las leyes respectivas para los negocios en que aquel sea parte.

Cuarto: que el decreto de 4 de Marzo de 1861, expresamente previene en su artículo 2º, que el juicio sea sumario, y lo mismo ordena la circular de 4 de Abril del mismo año, con referencia al artículo 23 del reglamento de 5 de Febrero del expresado año, no obstante que los litigios á que alude esta última disposicion, sean entre particulares y sobre puntos en que el fisco no tenga ya interés inmediato y directo.

Quinto: que si bien el citado decreto de 4 de Marzo de 1861 se refiere en su artículo 1º á juicios sobre derechos de propiedad de los bienes que fueron del clero, no limita expresamente á dichos juicios el procedimiento sumario, mientras que la circular de 30 de Enero de 1863, expresamente amplía ese mismo procedimiento á los juicios de posision; lo que, atento el espíritu con que se dictaron las leyes sobre desamortización ó nacionalización de bienes eclesiásticos, así como que en general domina en las leyes fiscales, presta mérito para hacer extensivo dicho procedimiento á todos los negocios en que se interesa el fisco.

Sesto: que el decreto de 28 de Marzo de 1862, solo declaró que el plazo de ocho dias fijado por el artículo 1º de 4 del mismo mes del año anterior, para ocurrir á los Tribu-

nales, se extendió únicamente con relación á las demandas contra el fisco, y no respecto de los demás negocios que por razón de los bienes nacionalizados se siguieran entre particulares; mas ninguna declaración hizo respecto del artículo 2º de dicho decreto, que es el que determina el procedimiento sumario.

Sétimo: que son inaplicables al presente juicio las consideraciones que por parte del Sr. del Moral se exponen con apoyo del decreto de 9 de Abril de 1862, porque aun no se trata de la exacción del capital denunciado, sino únicamente de la validez de la denuncia y redención del mismo.

Octavo: que el hecho de que ni el denunciante ni el C. Promotor fiscal hubieran pretendido, como pudieron y debieron hacerlo, que el procedimiento fuese sumario desde el principio del juicio, no basta en derecho para que continúe el procedimiento ordinario, supuesta la oposición de aquellos, que aunque tardía es atendible, por cuanto las leyes que arreglan el orden de los juicios, son de derecho público, y las de este género no son renunciables, como enseñan los autores, entre ellos Eschich, con fundamento de la ley 32, tít. 9, part. 6ª en la palabra "Ley."

Noveno: que supuesto el considerando anterior, no podría el suscrito Juez sin contraer grave responsabilidad, desatender la pretensión que motiva este fallo.

Decimo: que además, es ya jurisprudencia recibida en los Tribunales federales, la de que el procedimiento en negocios de la clase del presente, debe ser sumario.

Por los fundamentos expresados, y con arreglo á las disposiciones citadas, fallo: que el presente juicio debe continuarse sumariamente, reservando para definitiva la determinación sobre pago de las costas de este artículo. Notifíquese á las partes, y hecho, pasen los autos al Lic. D. Pedro Torres y Larraensar, para que se sirva tasar las costas devengadas hasta ahora por el suscrito Juez. Así lo mandó y firmó, fa-

llando en artículo el C. Juez 2º suplente de Distrito. Hasta hoy 8 de Agosto, se extiende este fallo por no haber ministrado antes la parte actora, papel sellado. Doy fé.—*J. Herrera.*—*Juan Pedro Nicoechea.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Puebla de Zaragoza, 20 de Diciembre de 1873.—Visto: y considerando; primero: que ninguna de las partes contendientes interpuso recurso alguno de la resolución dictada por el C. Juez propietario del Juzgado de Distrito, de 26 de Octubre de 1870, sobre que designó el término probatorio de 30 días comunes y prorogables; y que el C. Juez 2º suplente ha vuelto á corroborar esa misma determinación con fecha 30 de Octubre del año próximo pasado, del que tampoco se apeló ó se interpuso cualquiera otro recurso por parte del C. Lic. Manuel Arellano; que en consecuencia resultan, consentidas las dos resoluciones, así por el denunciante como por el Ministerio fiscal, de que la naturaleza de este juicio no fuere sumario, sino ordinario, como lo ha sostenido el C. Lic. Joaquín del Moral. Segundo: que como hasta ahora no consta de autos que se haya redimido el capital de que se hace referencia, sino que únicamente aparece la contienda entre el C. Arellano y Ceballos, queriendo el primero sostener la denuncia que tiene hecha del capital de 7.000 pesos que dice se reconocen en la hacienda de San Lorenzo, en jurisdicción del Distrito de Tehuacan, y el segundo viene negando la subsistencia de la imposición de ese capital, y apoyándose en la circular de 9 de Abril de 1872, para que esté juicio se sustancié en la vía ordinaria, supuesto que el Ministerio fiscal no ha sido quien desde el principio del litigio no manifestó ser interesado el fisco.

Por tales fundamentos, fallo: que se revisen los autos interlocutorios del inferior, de 27 de Julio y 3 de Setiembre del pro-

sente año, debiendo quedar subsistente el de 26 de Octubre de 1870, es decir, que debe continuar el procedimiento de este juicio en la vía ordinaria, como desde el principio comenzó, de consentimiento del Ministerio fiscal y del denunciante C. Lic. Manuel Arellano, reservándose para definitiva, para la resolución del pago de costas de este recurso. Hágase saber á las partes, y pasen los autos al C. Lic. Pablo Herrera, para que se sirva tasar las costas causadas hasta ahora por todos los Magistrados que han conocido del recurso de denegada apelacion, interpuesta por el C. Lic. Joaquin del Moral y practicada que sea, se remitirá testimonio de la determinacion precedente al C. Juez 2º suplente. Así lo mandó y firmó el C. Magistrado 2º suplente del Tribunal de Circuito. Doy fé.—*Lic. Fernando Barroeta.*—*Felipe de J. Almazan*, secretario.

Perdimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general de la Nacion dice: que el C. Lic. Manuel G. Arellano con fecha 9 de Marzo de 1870, denunció ante la Jefatura de Hacienda del Estado de Puebla como ocultos, dos capitales de los cuales el primero reconocía la hacienda de San Lorenzo, jurisdiccion de Tehuacán; y el segundo, la casa llamada "Amarilla" ubicada en la expresada ciudad. Practicadas por la Jefatura de Hacienda las diligencias correspondientes, y próximo á estenderse la escritura, se presentó el Lic. D. José Joaquin del Moral, á nombre de D. Juan Diaz Cevallos vecino de Tehuacán, oponiéndose á la denuncia; y despues de oidas ambas partes, la Jefatura de Hacienda dispone que el expediente pasara al juzgado de Distrito del Estado, para que éste resolviera las cuestiones de derecho, suscitadas entre el denunciante y el opositor. El Juzgado, tan luego como recibió el expediente, lo hizo saber á los interesados; y previa notificacion

al opositor, se entregó el expediente al denunciante, quien presentó escrito alegando los derechos que creía tener. De este escrito se corrió traslado por el término de tres dias al opositor, quien tambien expuso lo que creyó conveniente. Siguieron multitud de diligencias que no hay necesidad de mencionar aquí, pero en todas las cuales se ve con claridad, que se dió al juicio el caracter de ordinario. Durante el término de prueba, se promovieron varios incidentes, siendo uno de ellos relativo á la naturaleza del juicio. El actor se ha empeñado en demostrar que dicho juicio debe ser sumario; y el opositor por el contrario, se ha empeñado en demostrar que debe continuar en la via ordinaria, en que de hecho se comenzó y ha seguido; el Juez de Distrito, despues de sustanciar artículo y oír ampliamente á ambas partes, declaró por auto de 27 de Julio de 1872, que el juicio debía ser sumario, sin que para esto obstase que de consentimiento de las partes se hubiese comenzado y seguido en la via ordinaria. Los considerandos de este auto son varios, y en ellos se citan diversas leyes que no es necesario mencionar; pero sí conviene que éste Tribunal tenga á la vista para resolver este punto. El C. Lic. del Moral apeló de este auto, y promovió algunos otros incidentes de que ahora no es necesario ocuparse; pero la apelacion fué admitida, y los autos pasaron al Tribunal de Circuito de Puebla, quien despues de oír á ambos interesados, revocó el fallo de 1ª instancia y declaró que el juicio debía continuar en la via ordinaria, segun habia comenzado. Este fallo se funda en dos considerandos que obran á fojas 23 del Toca de 2ª instancia. El Lic. G. Arellano suplicó de este auto, y sustanciando artículo, se admitió el recurso no sin verse otros incidentes de que ahora no es oportuno ocuparse. Tal es el estado en que han venido los autos á este respetable Tribunal, para la revista del de 2ª instancia. El Procurador general cree inútil entrar á un examen minucioso de lo alegado por las

partes en una y otra instancia, ni de los fundamentos en que los respectivos tribunales han apoyado sus resoluciones. El que suscribe prefiere examinar la cuestion en su parte legal, y citar la ley que á su juicio es aplicable al caso de que se trata. Esa ley es la de 9 de Abril de 1862, y para su aplicacion es necesario fijar antes los hechos fundamentales de la demanda. El C. Lic. Manuel G. Arellano denunció los capitales de que se trata, considerándolos como nacionalizados; y alega para justificar que lo son, la cláusula de un testamento otorgado el 20 de Abril de 1802 por D. Antonio de Nava y Moya, y cuya cláusula que es la 10ª, establece una pension vitalicia que debe ir pasando á varias personas, y despues de ellas á una casa de ejercicios, que se estaba edificando en el Calvario de Tehuacan. No aparece escritura de fundacion ni de imposicion, ni hay hasta ahora mas constancia que la espresada cláusula del testamento de Nava y Moya. Ahora bien: el art. 1º de la ley de 9 de Abril de 1862, exige que "se presente testimonio formal de la escritura de imposicion; y en este caso dispone el art. 2º, que sean admisibles las escepciones legales que tienen lugar en la ejecutoria. Infórese de aquí recatemente, que dicha via ejecutiva solo tiene lugar cuando se presenta testimonio formal de la escritura de imposicion, que como hemos visto, no existe, ó al menos no se ha presentado en el presente caso. El mismo art. 2º previene, que "siempre que por la data de la escritura se conozca que ha transcurrido el tiempo necesario para la prescripcion de las acciones real o mixta, conforme á derecho comun *no podrá procederse ejecutivamente, y solo tendrá lugar la via ordinaria*, ya sea que la accion se ejerza por la autoridad pública, ó por algun denunciante á quien haya traspasado sus derechos." Hemos visto que en el presente caso, no hay escritura; pero suponiendo sin conceder, que el testamento de Nava y Moya tuviera fuerza de tal escritura, es un

hecho que desde la fecha de su otorgamiento á la presente, ha sacado mas que el doble del tiempo necesario para la prescripcion, y por lo mismo no puede procederse ejecutivamente sino en la via ordinaria, segun espresamente dispone la ley. Debe ademas tenerse en cuenta, que la ley habla de denunciante, á quien la Hacienda pública *haya traspasado* sus derechos. Si pues ese denunciante, que ya era un subrogatario, si aun la misma Hacienda pública necesita en este caso ocurrir por la via ordinaria, con mucha mas razon deberá hacerlo el denunciante, que, como G. Arellano no ha obtenido todavia la subrogacion de los derechos del fisco. Por estas consideraciones, el Procurador general pide se confirme el auto de vista de 20 de Diciembre de 1872, en la parte en que declara que el presente juicio debe seguir en la via ordinaria.

México, Setiembre 2 de 1873.—*L. Guzman.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 18 de 1873.—Vistos en artículo los autos promovidos por el Lic. Joaquin del Moral, en representacion del C. Juan Dias Ceballos, oponiéndose á la denuncia que el Lic. Manuel García Arellano hizo ante la gefatura de Hacienda del Estado de Puebla, de un capital impuesto en favor de una obra pía, en la hacienda de San Lorenzo y Casa Amarilla, situadas en el Distrito de Tehuacan, propiedad del expresado Ceballos, y cuyo artículo se refiere á si el juicio de denuncia debe seguir en la via sumaria, ó en la ordinaria.

Vista la sentencia del Juez de Distrito del mencionado Estado de Puebla, fecha 27 de Julio del año próximo pasado, que falla, que dicho juicio debe continuar sumariamente, reservando para definitiva el pago de costas de este artículo; la pronunciada por el Tribunal de Circuito respectivo en 27

de Diciembre del mismo año, que revocando la de su inferior declara: que debe continuar el procedimiento de este juicio en la vía ordinaria como desde el principio comenzó de consentimiento del Ministerio Fiscal y del denunciante Lic. Manuel Arellano.

Visto lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Procurador general; lo alegado al tiempo de la vista por el Lic. D. Francisco de Paula Segura, como patrono del Lic. Arellano, con los apuntamientos presentados por el Lic. German y Vasquez, como patrono de la parte de Diaz Ceballos, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando; primero: que el capital de 7000 pesos que en estos autos se ventila, está comprendido en el artículo 1º del decreto de 9 de Abril de 1862, por haber sido impuesto en testamento á favor de una obra pía, como lo es la casa de ejercicios que se estaba fabricando al tiempo de otorgarse dicho testamento en el lugar nombrado Santo Calvario, y que por lo mismo no es necesario que haya sido fundado.

Segundo: que los juicios que sobre esos capitales se promuevan, según lo dispuesto por la ley de 25 de Junio de 1856, y sus concordantes, deben seguirse en la vía sumaria.

Tercero: que á esto no obsta el que el presente juicio seguido entre el C. Juan Diaz Ceballos y el Lic. Manuel Arellano, se haya comenzado en la forma ordinaria por consentimiento de los interesados, porque siendo las leyes sobre nacionalización y desamortización de bienes, llamados de manos muertas, de derecho público, este no puede mudarse ni modificarse por el consentimiento ó voluntad de los particulares, como lo enseña el principio muy conocido en derecho, "juri público non potest á privatu renunciari," se decreta:

Primero: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito del Estado de Puebla, en 27 de Julio de 1872, que declara: que el pre-

sente juicio debe seguirse sumariamente.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*M. Auza.*—*S. Guzman L. Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Noviembre 10 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte.*

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Melchers sucesores, contra el cobro de setecientos treinta y tres pesos, setenta y ocho centavos, que se les exige como derecho de piso de mar causados por efectos introducidos á Mazatlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.—El Promotor fiscal dice:—Que habiendo examinado las pruebas rendidas por los Sres. Melchers, sucesores en el juicio de amparo que han intentado contra la Tesorería municipal de esta ciudad que les exige el pago del derecho de "piso de mar" por efectos introducidos de tránsito y minerales con destino al extranjero, y encuentra:

Que en su concepto, los Sres. interesados han probado suficientemente que los artículos que introdujeron y sobre que recae este juicio, han venido á este puerto guiados como de tránsito, y que los minerales no pueden tener otro destino que el de exportación al extranjero, y que por consiguiente, conforme á las disposiciones del art. 1º de la ley de 1º de Mayo de 1868,